

# La gran minería de carbón en el Cesar

## Más que locomotora... ¡aplanadora!

Adanías Quintero<sup>1</sup>

La Jagua de Ibirico está ubicada en el centro del departamento del Cesar, en el pie de monte de la Cordillera Oriental, a 125 kilómetros de la ciudad de Valledupar, su capital. El municipio de La Jagua de Ibirico limita al norte con el municipio de Becerril, al sur con el municipio de Chiriguaná, al este con la República Bolivariana de Venezuela, y por el oeste con el municipio de El Paso. Estos cuatro municipios vecinos integran el corredor minero en la subregión centro del Cesar.

La Jagua consta de tres corregimientos y 36 veredas, con una población cercana a los treinta mil habitantes. Se trata de un municipio de vocación agropecuaria, donde se dieron los primeros inicios de la minería del carbón en el Cesar. Fue así

como, en los años ochenta, se inició la pequeña minería, en la cual muchos *jagüeros* vieron una oportunidad laboral que, sin lugar a dudas, contribuiría a mejorar la calidad de vida de sus familias. Sin embargo, con el inicio de la minería a gran escala, en la década de los noventa, las riquezas del carbón pasaron de ser signo de prosperidad y desarrollo, a maldición, para la gran mayoría de habitantes de la región.

Algunos de los impactos sociales de mayor cuantía, generados por la gran minería del carbón en los municipios mineros del Cesar son:

- Expulsión por la fuerza de miles de personas que vivían de la minería artesanal.



<sup>1</sup> Dirigente campesino de la Jagua de Ibirico. E-mail: adanquin@hotmail.com

- Falta de oportunidad laboral para los nativos en las empresas multinacionales, que hoy explotan el carbón.
- Llegada permanente de emigrantes al municipio, en busca de oportunidades de trabajo, protagonizando procesos de invasiones en predios, por fuera del Plan de Ordenamiento Territorial, y con ello el colapso en las redes de alcantarillado, agua potable y electrificación.
- Incremento en la delincuencia común y la prostitución infantil, encarecimiento del costo de vida; corrupción en la administración pública.
- Pérdida de arraigos culturales, violencia y desplazamiento forzado de más de 700 familias campesinas en el municipio de la Jagua de Ibirico.
- Deterioro progresivo en la salud de miles de cesarenses, por diferentes enfermedades relacionadas con infecciones respiratorias (fibrosis, neumoconiosis, silicosis, bronquitis, neumonía) y algunas enfermedades de la piel producidas por la contaminación que genera la actividad minera.

Todos estos impactos no han sido, sin embargo, tenidos en cuenta ni por las empresas mineras, ni por el Gobierno colombiano.

80 mil hectáreas de tierra están intervenidas por la gran minería del carbón en el centro del Cesar, la mayoría de ellas en el municipio de la Jagua de Ibirico. Esto ha obligado a centenares de familias campesinas a vender, a menos precio, sus parcelas a las multinacionales Drummond, Glencore, Coalcorp, Norcarbón S.A., Goldman Sachs y la Vale, propietarias del carbón en el Cesar. Según Miguel Rivero, quien fuera presidente de la Junta de Acción Comunal de la desaparecida vereda Mechoacán, en la Jagua de Ibirico, el acoso de la empresa norteamericana Drummond, sobre las mas de cien familias campesinas que vivían en esa vereda, ubicada en el área de influencia de esta empresa multinacional fue tanta, que estas familias terminaron cediendo a la pretensión de la Drummond de quedarse con esas tierras ricas en carbón, pagando por ellas precios irrisorios.



Miguel Rivero considera “que la comunidad de Mechoacán fue desplazada, pero no por los grupos armados ilegales, sino por la empresa Drummond”. Y agrega que muchas de las personas que salieron de esta vereda lo hicieron con graves problemas de salud, debido a la contaminación que la empresa generaba permanentemente, siendo ésta una de las causas principales por la cual los habitantes de Mechoacán se vieron obligados a tener que vender sus parcela, en contra de su propia voluntad.

Pero no solamente la comunidad de Mechoacán ha tenido que sufrir esas violaciones; el mismo caso lo están viviendo los moradores de la vereda el Prado, quienes han sido acorralados por la empresa Glencore y el Incodeer. Dicha empresa y el Instituto Colombiano de Reforma Rural se pusieron de acuerdo para obligar a los campesinos a entregarle



Foto: Adaniés Quintero

*Las multinacionales Drummond y Vale tramitan ante el Ministerio del Ambiente la licencia ambiental que les permitirá explotar carbón a cielo abierto en Cerro Largo (La Jagua de Ibirico), explotación que pondrá en riesgo la existencia del río Sororia, fuente hídrica que suministra el vital líquido para el acueducto de este municipio.*

sus tierras a esta multinacional a precios insignificantes, valiéndose de la fuerza pública. Así, han utilizado la violencia para presionar a estos campesinos, quienes se resisten a que los expropien del derecho a sus tierras.

De igual manera, los moradores de los caseríos el Hatillo y Plan Bonito (municipio de El Paso), se encuentran asediados por las multinacionales mineras. Gigantescos botaderos de material estéril están siendo construidos casi encima de sus casas; el agua que consumen estos pobladores está contaminada por las nubes tóxicas, formadas del polvillo del carbón y los gases liberados por las permanentes voladuras realizadas por estas empresas, lo que

ha ocasionado un deterioro progresivo en la salud de estas personas que no tienen siquiera el derecho a emplearse en esas empresas.

El Ministerio del Ambiente expidió la resolución 0970 del 20 de mayo del 2010, mediante la cual le exige a las multinacionales mineras el inmediato reasentamiento de estas comunidades, incluyendo el corregimiento de Boquerón (municipio de la Jagua de Ibirico), que hace más de una década viene sufriendo problemas por la contaminación de la actividad minera. Sin embargo, estas empresas (algo nada raro en ellas), han apelado dicha resolución, y amenazan con no acatarla, a sabiendas de que eso



no les impedirá seguir recibiendo concesiones, dado que, afortunadamente para ellas, cuentan con un Gobierno nacional cómplice de la barbarie que vienen cometiendo en contra de los moradores de esta región del país.

Otro agravante de la gran minería en el Cesar es la amenaza que ésta representa para el recurso hídrico, ya que las empresas mineras han intervenido importantes fuentes hídricas en el corredor minero. Las desviaciones de los cauces de los ríos Calenturitas, San Antonio y El Pajui, por parte de estas empresas, han ocasionado efectos gravísimos en el recurso hídrico. Decenas de manantiales y pequeños afluentes han sido borrados por la actividad minera.

El río Tocuy, importante fuente hídrica que sirve de límite entre los municipios de La Jagua de Ibirico y Becerril, ha sido convertido por la multinacional Glencore en canal de drenaje, por el cual evacúan las aguas que extraen de los enormes socavones de explotación minera, aguas contaminadas con derivados de hidrocarburos (grasas, aceites para motor, entre otros) y residuos tóxicos derivados de explosivos utilizados en la minería, son vertidas sin tratamiento a la fuente hídrica. Asimismo, enormes montañas de material estéril son construidas dentro del perímetro de este río. Es claro que el impacto ambiental que generan las empresas mineras en el recurso hídrico del Cesar es de grandes proporciones. Pero lo más preocupante, es que aunque el Ministerio del ambiente tiene total conocimiento de todas estas irregularidades cometidas por las empresas mineras, en una franca violación a las normas ambientales, sigue entregando nuevas licencias de explotación, con lo cual estas empresas seguirán perpetuando estos crímenes ambientales.

Todas estas son razones suficientes que nos llevan a diferentes organizaciones sociales del departamento del Cesar a unirnos por la defensa de nuestro territorio, hoy

amenazado por las multinacionales del carbón.

Nuestra experiencia como líderes comunales, representantes de diferentes organizaciones sociales en el municipio de la Jagua de Ibirico, ha sido de lucha permanente por defender los derechos constitucionalmente reconocidos de los ciudadanos (derecho a la tierra, al agua, al ambiente sano, a la seguridad alimentaria, al empleo digno, entre otros). Estas luchas se vienen fortaleciendo con el trabajo constante, por generar conciencia frente a los problemas de la gran minería, trabajo que venimos realizando muchas personas en todo el corredor minero, y para lo cual estamos mirando la posibilidad de crear en el departamento del Cesar un frente común de resistencia, capaz de enfrentar la amenaza que representa la gran minería para el pueblo del Cesar. Para este propósito contamos con líderes políticos, sociales, campesinos, docentes, estudiantes y sindicatos, entre otros.

Somos conscientes de que no se trata de una tarea fácil, en un país absorbido por el neoliberalismo y el libre comercio (sistema que acabó con los medios de producción nacionales, y que hoy justifica la gran minería como única vía de salvación económica para los colombianos). En este contexto, suena una locura proponer alianzas que nos ayuden a lograr el descarrilamiento de la locomotora minera, que más que parecerse a una locomotora, a nosotros nos parece una aplanadora. 

